

legalmente por cualquier ministro que preside el Tribunal; pero en el orden de su nombramiento, la sustitucion en el presente caso, correspondia al C. Lic. Vicente Rodriguez Villanueva, quien protestó contra la exclusion que se hacia de su persona, si bien se separó del Estado de Morelos, por no considerarse allí con las suficientes garantías para el desempeño del cargo que le tocaba ejercer; que el puesto del C. Lic. Vicente Rodriguez Villanueva, como presidente del Tribunal, no debía estimarse vacante, mientras no fuere destituido del cargo con arreglo á las leyes; que aun en el caso de que su puesto se hubiese considerado vacante por su falta absoluta, debía sustituirlo el ministro interino que tocaba nombrar el Congreso, mientras se procedia á nueva eleccion, que el C. Lic. Agustin Clavería solamente debía considerarse apto para cubrir las faltas accidentales de los Magistrados propietarios, en los asuntos de la incumbencia del Tribunal; que nombrado dicho suplente por dos ministros propietarios, no puede entrar al desempeño del Gobierno del Estado, sin infraccion del artículo 109 de la Constitucion federal de la República; y que estando ya declarado por esta Suprema Corte, que procede el amparo, por violacion del artículo 16 de nuestra Carta fundamental, cuando hay en las autoridades incompetencia de origen por falta de legitimidad, es tambien aplicable al presente caso la concesion de ese recurso que no envuelve sin embargo ninguna declaracion general.

Por tales consideraciones y legales fundamentos, se resuelve.

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Morelos, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. Doña Manuela Cortazar de Cervantes, y á los Sres. Don Jesus y Don Faustino Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra

el decreto de 7 de Mayo del presente año, que trata de hacerse efectivo en sus personas.

Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege á la referida Sra. Doña Manuela Cortazar de Cervantes, y á los Sres. Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra la aplicacion del expresado decreto de 7 de Mayo último.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toen.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Maria Iglesias.—Miguel Auza.—Juan J. de la Garza.—José Maria Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio Maria Altamirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, 11 de Setiembre de 1874.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, solicitando el amparo de la Justicia federal, contra cobros que le hace el Administrador de la Aduana del Estado, situada en Mazatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los cinco juicios de amparo intentados por D. Othon Wegelin, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana terrestre de

este puerto, que le cobra por medio de la facultad coactiva, diversas sumas por derechos causados por mercancías extranjeras venidas á su consignacion, en virtud de las disposiciones del decreto sobre *derecho de consumo*, expedido por la Legislatura del Estado de 23 de Mayo de 1873, y con exclusion de la moneda de cobre, fundado en la ley de presupuestos del mismo Estado, estos diversos juicios, aunque diferentes en cuanto á las sumas que se cobran, y aun por razon de ciertas circunstancias peculiares á cada uno, no promueven una nueva cuestion, que no haya sido ya tratada en otros juicios de amparo anteriores, principalmente en los últimos, en que ha pedido el que suscribe, iniciado uno por el mismo Sr. Wegelin y otro por el Sr. D. Gerardo Garamendi, á nombre de los Sres. Tames y Carassus.

Por esto es, que para no incurrir en repeticiones, y concretando las cuestiones á los puntos que ya ha tratado, dá aquí por reproducidos sus alegatos, y pide al Juzgado se sirva tenerlos á la vista al tiempo de resolver en estos juicios.

Solo sí debe llamar la atención del Juzgado, sobre que prescindiendo de si es procedente la acumulacion de autos, apesar de las disposiciones especiales que rigen en esta clase de juicios, puede resultar el inconveniente de que en alguno sea precisa la recepcion de prueba, que en otro puede ser de todo punto innecesaria. Por ejemplo, en el primero de estos juicios, el Sr. Wegelin solicita amparo, *contra el indebido cobro que el Administrador terrestre me hace de la cantidad de seiscientos cincuenta y cinco pesos, sesenta y tres centavos, á título de derecho de consumo y en moneda de plata*, (estas son sus palabras) y el Administrador al rendir el informe asienta, (fojas 7 frente) *que la liquidacion de derechos de seis por ciento, sobre efectos extranjeros y contribucion federal respectiva, por los sesenta y cuatro bultos de mercancías nacionalizadas, que el Sr. D. Othon Wegelin*

TOMO VI.—PARTE II.

recibió de Guaymas por el buque nacional "Josefina Victoria".....ni siquiera ha sido presentada todavía para su cobro al citado Sr. Wegelin..... Y á la foja 14 y despues de siete dias de presentada la referida solicitud de amparo, es cuando el Administrador dice: *que hasta ese día, á las once de la mañana mandó cobrar al Sr. Wegelin*; de manera que resulta falso, ó el fundamento de la queja de Wegelin, ó falsas las aseveraciones del Administrador de la Aduana terrestre.

Tambien debe tenerse presente al tiempo de fallar en estos juicios, que en dos de ellos, y apesar de la suspension decretada, dicho decreto fué eludido por el Administrador terrestre, bajo el motivo de que estaba hecha en su cuenta la aplicacion de los fondos embargados, siendo que solo los habia secuestrado con el fin de asegurar, en virtud de la facultad coactiva, los derechos fiscales, y que nunca pudo tener facultad para haberlos adjudicado y aplicado en la manera que asienta, y lo que deja dicho en los juicios que pide se tengan á la vista.

Por todo lo expuesto, el Promotor fiscal es de parecer, que ese Juzgado resuelva: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Othon Wegelin, contra los diversos procedimientos del Administrador de la Aduana terrestre, ó del recaudador de contribuciones de este puerto, de que se queja en los cinco juicios de amparo que se han acumulado.

Mazatlan, 29 de Junio de 1874.—
L. Gaona.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Mazatlan, Julio 6 de 1874.—El Sr. D. Othon Wegelin, de esta vecindad y comercio, se ha presentado con cinco quejas de amparo en los dias 2, 6 y 22 de Mayo y 19 y 9 de Junio, por los siguientes cobros que lo hace el Administrador de la Aduana terrestre de esta Ciudad, ejercitando la

facultad económico-coactiva, y cuyas quejas se mandaron acumular en estos autos, que se encuentran en estado de resolución definitiva.

Primero: de dos mil quinientos cincuenta y un pesos noventa y un centavos, por derechos de consumo de los efectos extranjeros, que nacionalizados en Guaymas le vinieron á su consignación en los buques nacionales "Francisco" y "San Pablo."

Segundo: de setecientos nueve pesos cuarenta centavos, á título del mismo derecho de consumo, de las mercancías extranjeras nacionalizadas en Guaymas que le vinieron en el "Josefa Victoria."

Tercero: de setecientos seis pesos ochenta y siete centavos, de los cuales, trecientos ochenta y ocho proceden de la contribución de patente; ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, de derecho de consumo, decretado con arreglo al artículo 69 de la ley del Estado de 23 de Mayo de 1873; y el resto, de la contribución federal sobre ambos adeudos y multa al seis por ciento, por morosidad en el pago.

Cuarto: de sesenta pesos noventa y seis centavos, por derecho de consumo, de las mercancías extranjeras nacionalizadas en Guaymas, que vinieron á su consignación en el pailebot "Manzanares."

Quinto: por el de setecientos cincuenta y cinco pesos sesenta y tres centavos del propio derecho de consumo, de los efectos nacionalizados en el mismo puerto de Guaymas, que le vinieron á este en el "Josefa Victoria."

Los cobros, primero, segundo, cuarto y quinto, los funda el Administrador, en los artículos 19 y 29 de la citada ley del Estado de 23 de Mayo de 1873, que imponen un seis por ciento por derecho de consumo á los efectos extranjeros que se internen despues de importados, calculados sobre las cuotas de importación. Los cinco los exige en monedas de plata ó oro, con exclusión de la de cobre que circulaba en el Estado, apoyado en la fracción 22 artículo 19 del

decreto de la Legislatura del Estado de 28 de Diciembre último, que corre agregado á estos autos á pedimento suyo.

El Sr. Wegelin resiste al pago á que se refieren sus quejas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª, y al de la cantidad de ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, y su correspondiente contribución federal, y multa que se le cobra, según la queja 3ª por consumo, á virtud del artículo 69, alegando.

Primero: que el Estado no tiene facultades para gravar á los efectos extranjeros á título de consumo, por estar reservadas al Congreso de la Unión, en la fracción 9ª del artículo 72 de la Constitución general de la República, la de expedir aranceles para el comercio extranjero, y prohibido á los Estados, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones, en la fracción 1ª del artículo 112 de la misma Constitución.

Segundo: porque como comerciante por mayor y menor de esta plaza, paga el mismo derecho de consumo, impuesto por la propia ley de 23 de Mayo, en su artículo 69, bajo la base de un cincuenta por ciento, sobre la cuota que se le tiene asignada á su giro por derecho de patente; y resultaría doblemente gravado, si satisficiera el seis por ciento de consumo de los artículos 19 y 29 de la misma ley, y este doble gravámen por ser privativo á los giros de este puerto, infringe la garantía del artículo 13, que prohíbe en la República las leyes ó disposiciones privativas.

Tercero: porque se le exige el pago en moneda de plata ó oro, con exclusión de la de cobre, por disposición de una ley dada por el Estado, con invasión de la facultad del Congreso de la Unión, consignada en la fracción 23 del artículo 72, y violando la prohibición 3ª del artículo 111 de la Constitución general.

En cuanto á la cantidad de trescientos ochenta y ocho pesos y su correspondiente contribución federal, por derecho de patente, no disputa el Sr. Wegelin la legitimidad del adeudo, sino tan solo la exclusión de la

moneda de cobre que ha hecho el Administrador de la Aduana.

Tres son las cuestiones de derecho que hay que resolver en el presente negocio, para hacer la respectiva aplicacion á los casos propuestos.

Primera: ¿pueden los Estados gravar al comercio de efectos extranjeros, con derechos de consumo?

Segunda: ¿la disposicion de los artículos 19, 29 y 69 de la ley del Estado, de 23 de Mayo, aplicado á los comerciantes por mayor y menor de este puerto, importa un gravamen privativo á los comerciantes de Mazatlan porque les imponga únicamente á estos exceptuando los demas del Estado un doble derecho de consumo?

Tercera: ¿el Estado de Sinaloa ha tenido facultades para excluir del pago de sus impuestos la moneda de cobre, al determinar que todas las contribuciones y derechos de este sean cubiertos en moneda legal de plata ó oro, como lo dispone la fraccion 22 del artículo 19 de la ley de 23 de Diciembre último?

Sobre la primera cuestion, alega el Administrador que la derogacion de los artículos 19 y 83 del arancel vigente, que se decretó en la fraccion 13 del artículo único de la ley general de 31 de Mayo de 1872, importa una licencia á los Estados, para que puedan gravar los efectos extranjeros en los lugares de consumo, con derechos en favor de los mismos Estados, otorgada de entera conformidad con el artículo 112 de la Constitucion.

A esto puede añadirse, que en el juicio promovido por los Sres. Don Manuel Allende, Don Manuel Zorrilla y Doña María Figueroa de Varela, contra el derecho de consumo que se les exigia por decreto de la Legislatura de Oaxaca de 13 de Diciembre de 1872, consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nacion esa derogatoria, como un permiso á los Estados para decretar derechos de consumo sobre los efectos extranjeros, como puede verse en la

sentencia de 3 de Abril del año pasado, en las páginas 42 y 43 del tomo IV parte 39 del Semanario Judicial. Y realmente seria inútil la derogacion de los citados artículos del arancel, si la misma prohibicion habia de subsistir por la fraccion 13 del artículo 112.

En contrario aparece otra sentencia de la Suprema Corte fecha 10 de Abril del corriente año, pronunciada en el juicio de amparo que promovió D. Guillermo Soverbut, contra el cobro que le hace la Tesorería general del Estado, de la cantidad de ocho mil trescientos setenta pesos setenta y cuatro centavos, á título de derechos de consumo, y con arreglo al art. 89 del decreto de esta Legislatura de 30 de Diciembre de 1872, en donde se lee el siguiente considerando:

“Que la fraccion 13 del art. 112 de la Constitucion de la República, prohíbe á los Estados imponer derechos sobre importaciones, sin consentimiento del Congreso de la Union, consentimiento que hasta ahora no se ha dado por ese Poder nacional, pues no se puede considerar como tal la derogacion de los arts. 19 y 83 del Arancel de Aduanas vigente que decretó la ley de 31 de Mayo de 1872, y que el llamado derecho de consumo contra cuyo cobro se ha promovido el presente recurso por la manera de exigirlo y por la base decretada para su percepcion, es realmente un impuesto sobre importacion de mercancías extranjeras &c.”

El 6 por ciento de derecho de consumo que hoy se cobra por decreto de 23 de Mayo de 1873, lo mismo que el 8 por ciento que se exigia por el de 31 de Diciembre de 1872, toma por base el monto de los derechos de importacion, y se cobra con vista de la liquidacion de la Aduana marítima ó de los documentos que vienen cubriendo la carga del puerto de su procedencia: no hay pues diferencia entre el presente caso y el decidido por la segunda ejecutoria, y es sabido que la jurisprudencia posterior, debe ser preferida á la anterior.

Bien considerados los derechos de importacion que cobra el Gobierno general, son, por una parte, el precio uniforme del permiso con que los efectos extranjeros entran al comercio de toda la República, y este comercio supone necesariamente el consumo de todos ó de su mayor parte; y por otra, una proteccion á la industria de los Estados, si se permitiera á estos gravar los productos extranjeros, se convertiria en ilusorio el permiso dado por el Poder de la Union, seria una confusion que no se podria sujetar á cálculo, cuando menos por los comerciantes radicados en país extranjero, que no podrian estar al tanto de la legislacion de cada Estado, y aun de cada municipalidad en el territorio del Estado donde menos se gravaran, gozarían esos artículos de mas franquicias que en el otro que los gravase mas, y las naciones que por su posicion topográfica pudieran comerciar con este y no con el otro, tendrían motivo, ó por lo menos protesto para reclamaciones diplomáticas; y por último, unos Estados podrian gravarlos hasta donde considerasen los productos de su suelo mas mejorados que los de los otros, ó introducirían la desigualdad ó preponderancia que ha querido evitar el pacto federal con la disposicion de los arts. 72 fraccion 9ª, y 112 fraccion 1ª, como lo indica el Sr. Castillo Velasco al conmutar esos artículos, en los "Apuntamientos del derecho constitucional mexicano."

Todas estas razones deciden al ánimo judicial á resolver por la negativa la primera de las cuestiones propuestas, y reconocida la ilegalidad del adeudo, no hay necesidad de examinar si es ó no privativa á los comerciantes de Mazatlan, la obligacion de pagar.

Sobre la tercera cuestion es necesario reconocer, que la exclusion de la moneda de cobre en el pago de los impuestos á que se contrae el Sr. Wegelin, es una limitacion de la circulacion de esa moneda que solo al Congreso de la Union toca imponer, (frac-

cion 23 art. 72) é importa una disminucion del valor de ella con perjuicio de sus tenedores, quienes resultan expropiados de su valor legal sin previa indemnizacion, por una autoridad que contribuyó á imitarla.

Resuelto el incidente de suspension sobre la queja de 1º de Junio, el Administrador de la Aduana terrestre al ser notificado del auto relativo en que se disponia suspender la adjudicacion en pago de los sesenta y ocho pesos setenta y nueve centavos que se habían embargado al quejoso, contestó que ya estaba hecha cuando se le notificó. El Sr. Wegelin en vista de ello, pidió se le apercibiera de proceder en su contra, con arreglo al artículo 21 de la ley de 20 de Enero de 1869, si no deshacia la aplicacion y ponía la cantidad en calidad de depósito. Pero como lo dispuesto por el Juzgado fué únicamente la suspension, y no que deshiciera la aplicacion, no tuvo lugar el desobediimiento de la orden. Si el Sr. Wegelin vé en tal procedimiento cualquiera violacion de garantía que constituya delito, que el oficio del Juez no ha encontrado, puede pedir copia de las piezas de estos autos, que estime conducentes para el ejercicio de sus derechos.

Por las razones y fundamentos expresados, y con apoyo de los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal, y fraccion 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 Enero de 1869, se falla con las siguientes proposiciones.

Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. Othon Wegelin, contra los siguientes cobros que le hace el Administrador de la Aduana terrestre de esta Ciudad, por derechos de consumo de efectos extranjeros con arreglo á los artículos 1º, 2º y 6º de la ley del Estado de 23 de Mayo de 1873. 1º: De mil doscientos cincuenta y un peso noventa y un centavos, por los efectos extranjeros que vinieron de Guaymas á su consignacion, en los buques nacionales, "Francisca" y "San Pablo." 2º: De setecientos nueve pesos cuarenta centa

vos, por los efectos extranjeros que vinieron de Guaymas á su consignacion, en el buque nacional, "Josefa Victoria." 3º: De ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, por derecho de consumo directo. 4º: De sesenta pesos noventa y seis centavos, por los efectos extranjeros que le vinieron del mismo puerto, en el pailebot nacional, "Manzanares." 5º: De setecientos cincuenta y cinco pesos sesenta y tres centavos, por los efectos extranjeros que recibió por el buque "Josefa Victoria," procedentes del propio puerto de Guaymas.

Segunda: la Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. Othon Wegelin contra el acto del Administrador de la Aduana terrestre de esta Ciudad, que se niega á recibirlo en moneda de cobre la cantidad de trescientos ochenta y ocho pesos y su correspondiente contribucion federal, que le cobra en plata ó oro á título de derecho de patente con arreglo á la fraccion 5ª del artículo 1º de la ley del Estado de 28 de Diciembre último.

Tercera: expédiase al mismo Sr. Wegelin, si la pidiera, copia de las piezas de estos autos que señale como conducentes para acreditar sus derechos en contra del Administrador de la Aduana terrestre.

Cuarta: Remítase una copia de esta sentencia al Semanario Judicial, y otra al periódico de esta Ciudad para su publicacion, y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, para su revision.

El C. Lic. Joaquín García, 2º suplente del Juzgado de Distrito del Estado en ejercicio, definitivamente Juzgando, así lo proveyó y firmó.—Doy fé.—*Joaquín García.*—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia que certifico. Mazatlan, Julio 18 de 1874.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 8 de 1874.—Vistos los recursos presentados ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin solicitando el amparo de la Justicia federal, contra el cobro que le hace el Administrador de la Aduana del Estado, situada en Mazatlan. 1º: De la cantidad de cuatro mil setenta y siete pesos noventa centavos, en diferentes partidas, á título de derechos de consumo causados por las mercancías de procedencia extranjera que nacionalizadas en Guaymas, han sido remitidas de este puerto á consignacion del promovente en los buques "Francisca," "San Pablo," "Josefa Victoria" y "Manzanares." 2º: De ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, como derecho directo de consumo de mercancías extranjeras impuesto á los establecimientos de comercio de Mazatlan, y la correspondiente contribucion federal. 3º: De trescientos ochenta y ocho pesos por contribucion de patente, mas el veinticinco por ciento federal; en cuanto se le exige el pago en moneda de oro ó plata precisamente, con exclusion de la de cobre, en la cual está dispuesto á satisfacer ese derecho, alegando el promovente como fundamento de su queja, que las leyes del Estado de Sinaloa que han establecido las contribuciones denominadas de consumo directo ó indirecto, así como la que excluye la moneda de cobre para el pago de impuestos invaden la esfera de la autoridad federal, con infraccion de los artículos 72, fracciones 9ª y 23, 111, fraccion 3ª, y 112, fraccion 1ª de la Carta fundamental de la República; y en consecuencia: al pretenderse hacer efectivas las disposiciones de esas leyes, se violan en su persona las garantías consignadas en los artículos 13, 16 y 27 de la misma Constitucion. Visto el auto del Juez suplente de Distrito que por las razones legales que expresa, ordenó se acumularan las diferentes solicitudes del quejoso. Visto el informe de

la autoridad; el parecer fiscal con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Considerando: con respecto al derecho indirecto de consumo de mercancías extranjeras, que efectivamente es un impuesto que grava la importacion, pues se computa tomando por base los derechos que la Hacienda federal cobra á la misma clase de mercancías.

Que conforme á la fraccion 1ª del art. 112 de la ley fundamental, los Estados no pueden sin consentimiento del Congreso de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones.

Que el Poder Legislativo federal, hasta ahora no ha prestado su consentimiento, para que los Estados puedan imponer esa clase de derechos; pues no se puede considerar como permiso para ello la derogacion de los arts. 19 y 83 del Arancel de Aduanas vigente, decretada por la ley de 31 de Mayo de 1872, en virtud de que esta ley tuvo por objeto exclusivo, autorizar la imposicion de los derechos aduanales que se recaudan en el Distrito federal.

En cuanto al derecho directo de consumo de mercancías extranjeras, considerando que no grava directamente la importacion de esa clase de efectos, sino mas bien los capitales dedicados á ese tráfico.

Que la circunstancia de haber sido establecido ese impuesto solamente para los giros mercantiles del puerto de Mazatlan, no le dá un carácter de ley privativa, con infraccion del art. 13 constitucional, en razon de que los impuestos deben ser proporcionales, como lo previene el art. 31 frac. 2º de la Constitucion, y para guardar esa proporcion se pudo haber establecido esa diferencia entre Mazatlan y los restantes puntos del Estado, teniendo en cuenta la importancia de ese puerto.

Por lo que toca á la exclusion de la moneda de cobre para el pago de las contribuciones decretada por la ley particular, á Sinaloa, de 28 de Diciembre último.

Considerando: que conforme á los arts.

72 frac. 2ª y 111 frac. 3ª, los poderes de ese Estado han carecido de toda facultad para rechazar y hacer cesar en su circulacion una moneda acuñada en una oficina federal, cual es la de Culiacan; y emitida bajo la garantía de que sería recibida no solo por los particulares, sino que tambien por las autoridades que le dieran curso legal y forzoso, cuales fueron los poderes públicos del mismo Estado.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta:

Primero: es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 2º suplente de Distrito de Sinaloa, en 6 de Julio del presente año, en la parte que declara, que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Othon Wegelin, contra los siguientes cobros que le hace el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan, por derecho indirecto de consumo de los efectos extranjeros. 1º: mil doscientos cincuenta y un pesos, noventa y un centavos, por los efectos del origen que se ha indicado y que vinieron á su consignacion en los buques nacionales "Francisca" y "San Pablo." 2º: de setecientos nueve pesos cuarenta centavos, por los efectos que condujo la "Josefa Victoria." 3º: de sesenta pesos, noventa y seis centavos, por las que le fueron consignadas en el pailebot Manzanarcs.

4º: de setecientos cincuenta y cinco pesos sesenta y tres centavos, por los que recibió por el buque "Josefa Victoria."

Segundo: se revoca la misma sentencia, en la parte que concede el amparo federal, contra el derecho directo de consumo de mercancías extranjeras; y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Othon Wegelin, contra el acto de la expresada autoridad, que le cobra ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos por el mencionado derecho.

Tercero: se confirma la sentencia en la parte que declara, que se ampara al quejoso contra el acto del Administrador de la

Aduana de Mazatlan, que se niega á recibir en moneda de cobre la cantidad de trescientos ochenta y ocho pesos y su correspondiente contribucion federal, que le cobra á título de contribucion de patente, é igualmente se ampara al Sr. Wegelin, contra el acto de la misma autoridad que se niega á recibir en moneda de cobre, los ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, por derecho directo de consumo de mercancías extranjeras, y la correspondiente contribucion federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México Setiembre 28 de 1874.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro que le hace la Aduana terrestre de aquel puerto, de la suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos \$ 181 37 cs., á título de derecho de consumo directo de efectos extranjeros, que expende en su giro mercantil.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que no encuentra bastantemente clara la solicitud de am-

paro intentado por D. Othon Wegelin, y si demasiado confusa en algunos puntos, pues tantos fundamentos quisieran aducirse en favor de la pretencion, que á veces se encuentra un amontonamiento de citas, bien difícil de coordinar á primera vista. Aun hay algunos errores ó equivocaciones, pues en el tercer párrafo se habla del art. 13 fraccion 9ª, y al final del mismo párrafo ya no se cita mas que el art. 15 de la Constitución.

En concepto del que suscribo, y teniéndose presente que los juicios de amparo solo resuelven con especialidad el caso y á la persona del reclamante, parece innecesario y difuso por demás, que se ocupe el quejoso de todos los vicios que encontró á la ley sobre derecho de consumo, cuando á su propósito solo cumplia hablar del art. 6º relativo á los giros mercantiles, y segun el cual se le cobra por la Aduana terrestre una cantidad de pesos en moneda de plata ó oro, con exclusion de cobre.

El Fiscal pues, para no estraviar la cuestion ni debilitar tampoco su interés, pasa á ocuparse de dos puntos que en su concepto son los que han dado origen á la solicitud de amparo.

Primero: ¿pudo la Legislatura del Estado sin contravenir las disposiciones de la Constitución general, imponer á los giros mercantiles de este puerto las cuotas que señalan las diversas fracciones del art. 6º de la ley de 23 de Mayo de 1873?

Segundo: ¿cabe en las facultades del Congreso del Estado, como lo determina la ley de presupuestos del mismo de 27 de Diciembre de 1873, excluir para el pago de las contribuciones la moneda de cobre?

Se ocupará de uno y otro punto.

Por mas que al impuesto de tanto por ciento que deben pagar los giros mercantiles de este puerto, se les haya comprendido en la ley que lleva el nombre de *derecho de consumo á los efectos extranjeros*, basta examinar un poco los términos de la ley, para convencerse de que no es tal derecho de